

Ulrich Winter

La reorientación de la política cultural española en la legislatura socialista (2004-2006)

Al igual que en otras democracias occidentales, el conjunto de lo que se denomina política cultural en España no se limita a la gestión del Ministerio de Cultura, como, por ejemplo la legislación reciente respecto a la memoria y justicia históricas. Al mismo tiempo, como veremos en adelante, el nuevo gobierno socialista, muy al contrario del popular, define una parte importante de su programa político precisamente en términos culturales (el “reconocimiento de la diversidad cultural”, el concepto de “ciudadanía”, etc.), a la vez que insiste en reservar a la política cultural en sentido estricto una funcionalidad propia independiente (al menos en teoría) de criterios económicos. Por lo tanto, en la era socialista, la cultura no se limita a un determinado campo de sectores políticos que abarque desde las artes escénicas al fomento del sentimiento de identidad cultural, sino que es también el resorte ideológico de la política, es decir, el lugar donde se articulan, conservan y en parte realizan real o simbólicamente los valores del partido y en cierta medida también sus ideales o utopías políticas. Por eso, la política cultural se nos presenta como una lente condensadora, que permite ver algunos aspectos de la reorientación política socialista con nitidez, mientras que distorsiona otros. La gestión del Ministerio de Cultura, objeto del presente ensayo, se inscribe en esa funcionalidad a la vez concreta y simbólica e ideológica. Nos parece adecuado, por lo tanto, abordar el análisis de la gestión cultural del gobierno socialista y de los procesos de polarización y de reconciliación –por no decir “consenso”, término cargado por la retórica de los populares– en primer lugar desde sus formulaciones políticas, para atender posteriormente a las consecuencias reales de las políticas simbólicas de cultura y a los aspectos simbólicos de su práctica política. Comenzaremos, pues, esbozando algunas de las líneas generales y rasgos programáticos de la política cultural socialista. A continuación trataremos la gestión concreta

en función de sus objetivos básicos, para finalmente analizar algunos ejemplos y polémicas.

1. Líneas generales

La gestión cultural del actual gobierno español se basa en dos estrategias fundamentales. Por un lado, en el distanciamiento y la ruptura respecto a la política del gobierno popular, principalmente en cuanto concierne a lo que Javier Tusell (2000: 137) llamó la “sobrecarga ideológica” de la cultura dentro de un marco de nacionalismo centralista; por otro lado, en el continuismo, la recuperación y modernización de posiciones socialistas tradicionales –o, si se quiere, de la interpretación socialista de derechos constitucionales– como la promoción y tutela del acceso a la cultura para todos, el fomento de la lectura, etc.¹ Ambas estrategias se desarrollan en el marco de una tercera, que bien podría considerarse, citando a la propia ministra de Cultura, Carmen Calvo, la “filosofía” (Calvo 2004a) de la política cultural socialista, esto es, la adopción y la realización en el ámbito nacional de conceptos consensuados por entidades supranacionales (Unión Europea, UNESCO, OMC): el reconocimiento de la diversidad cultural, el concepto de ciudadanía, y otros. Además de ser una consecuencia jurídica de la integración internacional de España, la realización de estos y otros principios es una decisión programática basada en un principio que podría llamarse cosmopolitismo cultural. Éste reemplaza al modelo francés de política cultural española que se mantuvo como referente durante la era de gobierno de Felipe González, y funciona como impulso modernizador de los tradicionales contenidos de la política cultural socialista. Casi todos los contenidos sustanciales que figuran tanto en los posicionamientos programáticos del PSOE en general como en las propuestas de cultura en particular, bajo el marbete de los “cuatro ejes fundamentales” que constituyen las líneas políticas de actuación del Ministerio (tal como la ministra las expuso en su primera comparecencia ante la Comisión de Cultura del Congreso de los

¹ Cfr., respectivamente, los artículos 148 y 149 de la Constitución y el programa electoral de las elecciones generales 2004 del PSOE (PSOE 2006).

Diputados el 24 de mayo de 2004) se enmarcan en esta filosofía. Sobre todo los dos primeros: “El reconocimiento de la diversidad cultural” y “el concepto de ciudadanía”. El tercer y cuarto ejes, “la búsqueda de la cohesión social”, y “el fortalecimiento de la cooperación cultural” en el interior y el exterior, representan, en cierto modo, su traducción al ámbito nacional (Calvo 2004b: 3).² Mientras que para el gobierno popular el referente trascendental de la política cultural era el unitarismo español, el actual gobierno concede prioridad a conceptos cosmopolitas, que se presentan como ajenos a la lucha de partidos, y con validez supranacional.

Este cambio de rumbo conlleva varias consecuencias:

En primer lugar, aplicar el principio del reconocimiento de la diversidad cultural, consensuado en un contexto supranacional, a un país con una realidad plurinacional, marcado, por un lado, por conflictos nacionalistas internos, motivados por la coexistencia de nacionalismos con desarrollos muy distintos y, por otro, por la existencia de amplios sectores partidarios del centralismo, crea crispación en varios niveles. Como muestra el caso de los “papeles de Salamanca” que estudiaremos más adelante, el consenso o la polarización es una cuestión de óptica. Lo que contradice la idea del unitarismo español, se justifica como consensual a un nivel de referencia superior (como aplicación del principio cosmopolita de reconocimiento de la diversidad cultural o de “la convivencia de culturas”) o bien inferior (reconocimiento de derechos culturales de las Comunidades Históricas).

En segundo lugar, mientras que en la concepción neoliberal del Partido Popular, la cultura se vio supeditada a finalidades económicas e ideológicas, en el gobierno socialista, la cultura pasa a ocupar una posición clave dentro del sistema de campos políticos. Incluso las nuevas convicciones y objetivos básicos políticos en general se definen en términos culturales, como por ejemplo, “el reconocimiento de la diversidad cultural” o “la ciudadanía como derecho cultural”. Sin perder el estatuto de relativa autonomía económica, la cultura ahora se relaciona orgánicamente, esto es, desde los objetivos trascendentales, con los campos políticos más pragmáticos. Los socialistas ponen énfasis en el estatuto de “excepción cultural”; cultura, por consiguiente, goza de

² Véase también el programa electoral del PSOE antes citado.

legitimación autorreferencial, por lo que debe ser autónoma, depender únicamente de ciertos principios generales compartidos por todos (como la identidad cultural) y contribuir tan sólo indirectamente a la eficiencia económica o social, en lugar de hacerlo directamente.³ De tal modo se otorga a la cultura, según nuestra tesis, el papel de resorte ideológico de la filosofía socialista, formando al mismo tiempo el principio y el contrapeso a otros campos políticos que se legitiman por la eficiencia económica cuantificable. Cuando los objetivos de la política en general se definen en términos culturales, conservar su autonomía y servir a fines políticos ajenos a la cultura, no resulta una contradicción para la política cultural, como lo fue durante el gobierno del Partido Popular.⁴ Pero además, por su naturaleza idealista, la cultura necesita símbolos visibles; de ahí la importancia y trascendencia del centenario del *Quijote* (ver abajo).

Una vez señalados algunos rasgos programáticos de los socialistas en materia cultural, pasemos a continuación a abordar las estrategias destinadas a poner en práctica por el nuevo estatuto de la cultura.

2. Cambios, disposiciones, gestiones

Un primer principio de gestión es la recuperación y el aumento de la autonomía y la profesionalidad en el ámbito de la cultura. Un hecho trascendental que ha de señalarse en primer lugar es la reincorporación como un ministerio independiente del Ministerio de Cultura, que en la época popular había estado convertido en una Secretaría de Estado del Ministerio de Educación cuya Comisión Delegada de Cultura dependía

³ Véase el discurso de investidura del entonces candidato a la presidencia del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero: “[...] para el gobierno de España la cultura no merece ser tratada como una mercancía más. La cultura no es un objeto mercantil puro que deba regirse estrictamente por las reglas de la oferta y la demanda. La cultura encierra todo el pasado y todo el futuro de un país, las vivencias de las generaciones pasadas, las ambiciones de futuro de nuestros conciudadanos. Esta razón, y no otra, justifica el principio de excepción cultural que defenderemos desde el gobierno” (Rodríguez Zapatero 2004).

⁴ Para la política cultural de los populares y sus contradicciones internas, *cfr.*: Rubio Aróstegui 2005.

directamente de la presidencia del gobierno.⁵ Los socialistas, en sus intervenciones parlamentarias, no han dejado de destacar el valor simbólico de la existencia de un Ministerio de Cultura, seña de identidad de los gobiernos republicanos y socialistas.⁶ A la restauración del Ministerio de Cultura se añade el relevo de altos cargos y miembros de los patronatos de las instituciones culturales más importantes, como el Museo del Prado, el Teatro Real, etc., por profesionales versados en su oficio que en muchos casos forman parte del “equipo andaluz” a la cabeza del cual se sitúa la que fue delegada cultural autonómica, y es ahora ministra de Cultura, Carmen Calvo. En el último bienio Cultura ha visto considerablemente aumentado su presupuesto —en 2005 un 9,6%, más del doble de lo que creció en toda la legislatura anterior. Del nuevo reparto de fondos se han beneficiado proyectos tradicionalmente asociados con la política cultural socialista como el fomento de la lectura, la producción cinematográfica, etc. Finalmente, se hace hincapié en conceptos igualmente socialistas como la “excepción” o “especificidad cultural” y se reajusta, por vía legislativa, la coordinación del 1% cultural.⁷

Aparte del aumento de la conexión interministerial de Cultura, un segundo principio de actuación tiene como objetivo el reconocimiento y la protección de la “diversidad de las expresiones culturales”. En este objetivo tan innovador respecto al gobierno del Partido Popular, y que resulta mucho más susceptible de provocar polarizaciones que los que se acaban de mencionar, coinciden al menos dos políticas culturales, y se desarrolla en dos niveles distintos:

En primer lugar, una vertiente exterior: la ministra de Cultura fomenta activamente la organización de encuentros y resoluciones interculturales, así como la participación española en los mismos. Algu-

⁵ En el discurso de investidura de 2000, y de manera aún más señalada en el de 1996, del entonces candidato a la presidencia del gobierno, José María Aznar, la cultura aparecía como un aspecto de muy bajo relieve y asociada a la educación o en el sentido de una “potencia” útil en “un mundo abierto” (Aznar 2000).

⁶ Véase al respecto Calvo 2004b: 38.

⁷ Véase el proyecto de ley sobre la excepción cultural, anunciado el 24 de mayo de 2004 con motivo de la primera comparecencia de la ministra de Cultura en el Congreso de los Diputados (Calvo 2004b: 5). Véase para la política cultural socialista en las legislaturas anteriores Rubio Aróstegui 2003.

nos ejemplos son el Foro Cultural Mundial (2 de julio de 2004), la Convención Internacional sobre Protección de la Diversidad de los Contenidos Culturales y de las Expresiones Artísticas durante la Conferencia General de la UNESCO (octubre de 2005), la Declaración a favor de una Carta Cultural Europea (9-11 de mayo de 2005), la Declaración de Madrid a favor de la diversidad cultural (10-12 de junio de 2005), el Fórum de Barcelona, etc.

Las actividades exteriores mencionadas testimonian el alto valor político que los socialistas otorgan al cosmopolitismo cultural. En la misma lógica se enmarcan la traducción del principio de reconocimiento de la diversidad cultural al ámbito interno⁸, en especial las políticas de identidad nacional o cultural respecto al pasado bélico y totalitario del siglo xx, y las políticas de reconocimiento de los derechos culturales de las Comunidades Históricas.⁹ Estas políticas están guiadas por las ideas de reconciliación y reconocimiento, así como de la conservación y consolidación del patrimonio cultural como fuente de los sentimientos de la identidad nacional española y su evolución histórica.

Este vector de la gestión cultural, en un principio, está destinado a obtener efectos consensuales, estabilizadores. En la práctica, sin embargo, a medida que van surgiendo las implicaciones políticas directas, comienza a despertar ciertos recelos la disposición socialista de conceder derechos culturales adicionales a las Comunidades Autónomas, y especialmente a Cataluña. Según el principio de la diversidad cultural, la idea de justicia histórica implica el reconocimiento de un pluralismo irreducible de memorias o, respectivamente, de comunidades de memoria, que se opongan a la semántica unitaria de la “unidad de España” en cuanto comunidad histórica de destino, tal como la habían planteado los populares. Analizaremos más detenidamente este asunto al tratar el contencioso sobre los llamados “papeles de Salamanca” donde, por cierto, confluyen todos los temas abordados hasta aquí.

⁸ De hecho, según la política cultural oficial, el objetivo de reconocer la diversidad cultural afecta tanto al exterior como al interior. *Cfr.* Ministerio de Cultura 2006.

⁹ Estas políticas van desarrollándose, en parte, a través de la revitalización de la cooperación interterritorial por medio de la Conferencia Sectorial de Cultura, prácticamente abandonada por el Partido Popular (sólo la convocó una vez en sus ocho años de gobierno).

Hechas estas consideraciones, pasaremos directamente al análisis de dos casos ejemplares de la gestión cultural.

3. El IV Centenario del *Quijote*: símbolo del patriotismo cultural

Que el IV Centenario de la publicación del primer tomo del *Quijote* en 2005 coincidiera con el segundo año de la legislatura socialista, debe haber sido, para los miembros del partido en el gobierno, una feliz casualidad, algo así como un golpe de fortuna histórico. Al igual que para los populares la Constitución Española, cuyo XXV aniversario se celebró en 2003, la novela cervantina, más que un acontecimiento, es un emblema que parece haber sido inventado para plasmar simbólicamente el conjunto de la programática cultural del actual gobierno. El patriotismo constitucional, por un lado, y por el otro, un patriotismo cultural a la vez cosmopolita e hispanocéntrico. El *Quijote* se considera

como libro fundamental de la lengua que compartimos con tantos ciudadanos del mundo, y también como símbolo de una civilización que ha tenido hasta ahora en el libro, en general, la fuente principal de comunicación. [...] [Y] en particular, [es] la casa común para la acogida y la convivencia de muy distintos modos de sentir y pensar.¹⁰

Esto es, símbolo del reconocimiento de la diversidad cultural. Para el exterior, el *Quijote* representa un “referente y emblema de nuestra cultura, además de un arquetipo en el que se concitan algunos de los valores más significativos y fundamentales de la cultura universal”:

¹⁰ Y sigue la cita: “quizá [...] la efeméride nos ponga en las manos la ocasión para discutir sobre el estado actual de una lengua con más de 400 millones de hablantes [...] para abordar nuevos proyectos de ámbito nacional e internacional que influyan y hagan reflexionar en foros tan diversos como el político, el de la integración social o los de la cultura. Esta efeméride puede ser el eje del Plan de Fomento de la Lectura. Un plan que debe llegar a todos los sectores de la población y a todas las edades, por lo que será fundamental la participación de otros departamentos. En especial del Ministerio de Educación y Ciencia, de Trabajo y Asuntos Sociales; sin olvidar Interior, Sanidad o Defensa. Asimismo, no se olvidará la población inmigrante que, a través de la lectura, encontrará un elemento adecuado de integración” (Calvo 2004b: 4-5).

[Su] importancia [...] rebasa los ámbitos hispánicos [...] brinda una ocasión [...] para fortalecer el reencuentro y expresión de los diferentes pueblos ibero-americanos en lo que los hace singulares y diversos. Es, también, una llamada a todos los ciudadanos del mundo para propiciar el diálogo y la comunicación por medio de la cultura” (Ministerio de Cultura 2004a); “una manifestación [...] de los valores y derechos humanos” (Ministerio de Cultura 2004b).

A fin de tener otra impresión de la semantización cosmopolita del símbolo, puede citarse, entre los múltiples actos organizados por la comisión y el consorcio creados al efecto, un debate sobre el *Quijote*, patrocinado por el Ministerio de Cultura, en el Foro Social Mundial de Porto Alegre en enero de 2005, para “debatir la sociedad civil a nivel mundial”, bajo el título “Quijotes de hoy: Utopía y política” (Ministerio de Cultura 2005a). Para los socialistas, el *Quijote*, al igual que, por ejemplo, el Museo del Prado, cuenta con esta “doble dimensión nacional y universal”, porque representa “el retrato universal de nuestra historia y de nuestra cultura artística” (Calvo 2004b: 9). Estas imágenes del *Quijote* se unen, como es sabido, a una larga tradición, que se remonta cuando menos a la generación del 98, aunque ahora, por razones obvias, el símbolo ya no lo constituye el héroe sino el libro en sí. El *Quijote* se ha vuelto un símbolo de política cultural reconciliador, y en este sentido, consensual. Por su naturaleza simbólica, el centenario no ha provocado apenas polémica.¹¹ Muy al contrario del caso de los “papeles de Salamanca”.

4. La polémica en torno a los “papeles de Salamanca”

La polémica en torno a la devolución de los llamados “papeles de Salamanca” a la Generalitat de Cataluña representa un caso particularmente significativo de los estímulos de polarización implícitos en los parámetros de la nueva política cultural. La acción se había puesto en marcha por iniciativa de la Comissió de la Dignitat y se realizó bajo la direc-

¹¹ Salvo tal vez el comentario de la diputada del Grupo Popular, Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza: “[...] es una cosa improvisada, que va a hacer un programa de festejos y no una conmemoración, que va a poner el logotipo a cuantas iniciativas sociales caigan en su mano, pero esto no es lo que demanda de usted una conmemoración como la del *Quijote*” (Rodríguez-Salmones Cabeza 2004: 1822).

ción del Ministerio de Cultura. Según el trámite preceptivo y de conformidad con la ley correspondiente, aprobada por el Parlamento español el 3 de noviembre de 2005, se restituyeron a la Generalitat de Cataluña, en la madrugada del 19 de enero de 2006, los documentos incautados a entidades radicadas en Cataluña en 1938 y 1939 con fines de represión política y custodiados desde entonces en el Archivo General de la Guerra Civil Española, en Salamanca. En contrapartida, como compensación, se salvaguarda, en razón de su interés histórico y cultural, la integridad funcional del archivo y de la documentación albergada en él. Con este fin se decidió depositar en el archivo una copia o duplicado de todos los bienes restituidos. Además, la ley prevé la creación de un Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, y de gestión y titularidad no autonómicas, sino estatales, en el que se recojan los fondos del Archivo de Salamanca y toda la documentación relacionada con esta época (Ministerio de Cultura 2005b).

En un principio, el gobierno pretendía enmarcar el traslado de los papeles en una política del pasado no polarizadora, sino reconciliadora, en la línea de las leyes de amnistía basadas en los principios de justicia histórica y reparación democrática, pero también de recuperación de la memoria histórica y conservación del patrimonio histórico (Ministerio de Cultura 2005c). Desde la “filosofía” de la política cultural socialista, puede suponerse incluso que se trataba de un acto de reconocimiento y subsiguiente recuperación de derechos históricos y culturales, de diversidad y de cooperación cultural. Remitiéndose a la antigüedad del caso y a la legalidad del proceso, la retórica socialista niega cualquier implicación partidista de la cuestión, limitándola a “una cuestión de justicia” cuyo “fondo [...] trasciende a las meras líneas políticas de los partidos” (Calvo 2005a: 5060).

Sin duda alguna se trató de un proceso legal y democrático. La ley, precedida por una Proposición No de Ley, aprobada en el Congreso de Diputados en mayo de 2004, que instaba al gobierno a establecer un diálogo con la *Commissió de la Dignitat*, y por un informe de un comité multidisciplinar de expertos, fue aprobada por todos los grupos a excepción del PP, y la enmienda a la totalidad de la ley presentada por el grupo del PP no fue apoyada por ningún otro grupo parlamentario.¹²

¹² En enero de 2006, el Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por la Junta de Castilla y León contra la Ley de Restitu-

Los tres asesores designados desde Castilla y León para formar parte del Comité de Expertos se abstuvieron en lugar de votar contra la ley. Para el comité de expertos, “la llegada de la Democracia supone la apertura del Archivo a la investigación y permite además su utilización para objetivos contrarios a aquellos para los que fue creado: el reconocimiento de derechos a víctimas de la guerra y de la represión”. Devolver los papeles corresponde además al principio archivístico de “procedencia”.¹³ Cabe preguntarse, sin embargo, por qué el traslado de los documentos pudo irritar de tal manera las sensibilidades públicas. ¿Por qué no fue posible mantener el equilibrio entre el reconocimiento de los derechos culturales (diversidad cultural a nivel autonómico) y la unidad española como condición de posibilidad de una política cultural socialista según la filosofía antes expuesta? Y en este caso concreto: ¿Por qué tampoco fue aceptada la idea, propuesta por el comité de expertos, de que al reemplazar los papeles restituidos por copias o duplicados se conservaría la esencia del Archivo? Para dar una respuesta que relacione el problema con los planteamientos de la política cultural del gobierno socialista, cabe distinguir dos aspectos, que se entremezclan premeditadamente en el debate. Primero, el simbólico. Para los oponentes a la ley, la “desmembración”, “desarticulación”, “desintegración”, “desvirtuación” o “desmantelación” del Archivo equivale a la pérdida de la unidad de España a favor de los catalanes. Segundo, el aspecto político: el alcance únicamente bilateral de la Ley de Restitución se considera, o bien injusto respecto a las Comunidades Históricas no contempladas por la Ley (en primer lugar el gobierno vasco), o bien una “caja de Pandora” por lo que implica de precedente en el futuro para la legitimidad de otros archivos.

(1) Veamos el primer aspecto. Que se trata fundamentalmente de un acto simbólico y politizado es lo único en que todos los grupos implicados coinciden. Según José Álvarez Junco, miembro del comité de

ción a la Generalitat de Cataluña de los documentos incautados durante la Guerra Civil. Véase Yoldi/Lázaro 2006.

¹³ Véase el “Informe de la comisión de expertos creada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil para asesorar sobre el contencioso derivado de la reclamación de restitución de la documentación incautada a la Generalitat de Cataluña a la finalización de la Guerra Civil española”, del 23 de diciembre de 2004 (Álvarez Junco/Bernal i Cercós *et al.* 2004).

expertos, “después de la transición [...] la gran mayoría de la opinión castellana [...] había interiorizado [el Archivo de Salamanca] como símbolo de *su* memoria colectiva” (Álvarez Junco 2004). Para la Confederación de Asociaciones de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas, el Archivo General como testimonio histórico es un auténtico “lugar de la memoria” español (ANABAD 2004). Cataluña, por su parte, hubo de esperar más de veinticinco años para la devolución de los documentos.¹⁴ Es más: Nueve de las 500 cajas contienen documentos relacionados precisamente con el Estatuto de Cataluña de 1932, e incluso algunos incluyen el texto del mismo (*El País* 2006). Finalmente, los oponentes a la devolución de los documentos, al subrayar también el aspecto simbólico, se valen de una retórica acuñada por el PP ya en los años noventa, y omnipresente en los discursos conservadores del momento: “El archivo *es* España”, se trata de “la destrucción de un símbolo nacional” (Acebes 2006). Una variante extrema de esa figura retórica se ha convertido en la que más se ha barajado desde entonces en los sectores conservadores: la “unidad de España” tiene su presencia real en la unidad física de los papeles originales de Salamanca, y se desintegrará en cuanto se desmantele el Archivo. Además de que la lógica de esa figura retórica (“el Archivo *es* España y la devolución de documentos equivale a la cesión de territorios”), identifica España con un constructo fascista inventado con fines represivos, ese argumento no tiene base real. Como advierte Álvarez Junco (2004), las 500 cajas devueltas a Cataluña representan un 3% de la totalidad de los documentos¹⁵, se debería hablar, por lo tanto, de “fondos de la Generalitat de Cataluña anteriores a 1939, y no de ‘papeles’ de Salamanca”.

Pero una figura retórica no necesita base real, pues aun sin ella puede funcionar, y a veces incluso mejor. La Junta de Castilla y León se considera el guardián de la memoria histórica de España, y opina que Salamanca es la ciudad idónea para el “Archivo de España”: “El gobierno de Castilla y León no va a permitir en ningún caso que se des-

¹⁴ Decreto-ley 41/1977, del 29 de septiembre.

¹⁵ Joan Culla, por su parte, advierte que tampoco ha sido la primera vez en que se trasladaron documentos, pues ya lo hicieron los franquistas para apoyar la represión de sus enemigos. Y recuérdese que la primera Proposición No de Ley para la devolución de los documentos a Cataluña la firmó en 1980 el propio Manuel Fraga (Culla 2006).

manente España”.¹⁶ El debate no sólo provoca temores unitaristas, como por ejemplo el de que la devolución de papeles en base a derechos históricos esté “íntimamente ligado a que Cataluña sea una nación y que no lo sea España”, como dice un comentarista (Acebes 2006). De ahí tan sólo hay un paso a las metáforas bélicas traídas a colación por los oponentes más radicales –representantes populares de la Junta de Castilla y León y comentaristas conservadores entre los que se cuentan escritores como Juan Manuel de Prada o Gonzalo Santonja, que fomentan el reciclaje de todos los fantasmas de “las dos Españas” convirtiendo el contencioso en una nueva Guerra Civil anticatalanista. Desde las páginas de *El Mundo* Francisco Umbral lanza el grito: “Toda España es Salamanca”; por su parte, *ABC* titula “La batalla de Salamanca”. El alcalde, Julián Lanzarote, promete la defensa en caso necesario “física” del Archivo, y representantes del Partido Popular se apropian, pervirtiendo su sentido, de la frase que Miguel de Unamuno espetó a Millán Astray en el paraninfo de la Universidad el 12 de octubre de 1936, “venceréis pero no convenceréis”. En otros casos el debate degeneró en las peores retóricas de cruzada anticatalanista y de primitivo antimodernismo.¹⁷ Los esquemas de interpretación premeditadamente irracionistas y polarizadores movilizados por conservadores y unitaristas –la conjuración de una nueva Guerra Civil, las “dos Españas” redivivas, el unitarismo español estratégicamente anticatalanista, el antimodernismo– apuntan a disposiciones mentales históricamente arraigadas en algunos sectores de la población. Así, el debate simbólico sobre los “papeles de Salamanca” hace visible los límites de transferibilidad del principio cosmopolita del reconocimiento de derechos culturales al campo de conflictos nacionalistas internos.

(2) Pasemos a la otra manzana de la discordia, el aspecto político del contencioso. La polémica en torno a los “papeles de Salamanca” se nutre por supuesto de una sensibilidad anticatalana exacerbada con motivo del debate sobre el nuevo Estatuto autonómico, un debate que,

¹⁶ Véase la “Declaración institucional de la Junta sobre el Archivo de Salamanca” (Junta de Castilla-León 2005).

¹⁷ Véanse los documentos recogidos por el Ayuntamiento de Salamanca en su página de Internet. Para la frase de Unamuno, véase el comentario de Santos Unamuno 2005.

por otro lado, supone una coyuntura propicia para la devolución de los documentos.¹⁸ Aun más grave resulta lo restrictiva que es la ley. Según un “Informe de los archiveros españoles”, reproducido en la página web del Ayuntamiento de Salamanca, “[q]uedan fuera del ámbito de aplicación del proyecto de ley los documentos de las instituciones públicas republicanas” así como “los documentos o archivos incautados al gobierno vasco, segundo gobierno autónomo existente en la España Republicana”. El informe pone especial énfasis también en otro hecho:

Por primera vez se aceptaría proceder a una transferencia de fondos de un archivo de titularidad estatal y gestión directa del Ministerio de Cultura a un archivo de Comunidad Autónoma, con lo que tal hecho implicaría de precedente insoslayable en el futuro para no aceptar que sea transferida la gestión de otros archivos de titularidad estatal y gestión directa [...] del Estado a las Comunidades Autónomas.¹⁹

Como era de esperar, la prensa conservadora respalda este punto de vista: “Toda España”, dice el editorialista de *ABC*, “asist[e] a la apertura de una Caja de Pandora, esto es, entrar en un proceso de reclamaciones de otras Comunidades Autónomas”. Según el editorialista de *El Mundo*, la idea de fragmentar la posesión del patrimonio cultural y documental entre 17 comunidades pone “fin al consenso”, porque “va a agravar más las crispaciones entre las distintas partes de España”.²⁰

Si bien es cierto que estas opiniones se encuentran en la línea, ya comentada, de una instrumentalización ideológica del debate, la gestión del Ministerio de Cultura en este caso evoca otro aspecto particularmente interesante para el tema que estamos tratando, pues pone de relieve una contradicción en el nivel programático o ideológico de la

¹⁸ Algunas voces críticas no dejaron de relacionar la rapidez de su tramitación con las presiones políticas por parte de Esquerra Republicana de Cataluña; véase la intervención de Gonzalo Robles Orozco (Grupo Popular) en el Congreso de los Diputados (Robles Orozco 2005: 4043-4044).

¹⁹ Véase el “Informe de los archiveros españoles” reproducido en la página web del Ayuntamiento de Salamanca.

²⁰ Artículo de Antonio González Quintana en *ABC* y editorial de *El Mundo*, 30/12/2004, respectivamente; citados según la página web del Ayuntamiento de Salamanca.

política cultural entre formulación política y realización. Henry Ettinghausen califica la transferencia de papeles como “aplicación discriminatoria de justicia”, “poco convincente”, “que tiene la desgracia de dar credibilidad a la acusación por parte del Partido Popular de que la devolución de los “papeles” responde a presiones políticas” (Ettinghausen 2005). De hecho, la ley no parte de un concepto general de víctima tal como habría sido de esperar de una política inspirada en un concepto cosmopolita de reconocimiento de derechos culturales.

La polémica en torno al Archivo General de la Guerra Civil, instigada por medios conservadores y partidarios del Partido Popular por razones políticas, hace resaltar de manera ejemplar el potencial de polarización implícito en los parámetros de la nueva política cultural, precisamente porque se trata de un debate simbólico, politizado y de pasiones exacerbadas, en el cual se reflejan las sensibilidades encontradas acerca del nuevo Estatuto catalán y del concepto de “unidad de España”, y tal vez un malestar generalizado, inconsciente e indeterminado en los sectores conservadores de la población frente a los cambios políticos en la nueva España de los socialistas, un malestar que el principal partido de oposición, al realizar al mismo tiempo un giro hacia la ultraderecha, ha sabido fomentar e instrumentalizar. Los socialistas no han logrado neutralizar la figura retórica que en la sensibilidad conservadora de la población ha reemplazado a la realidad, esto es, que la conversión del archivo real en archivo virtual corresponda a la “desmantelación de España”. Los planteamientos de la política cultural socialista, al parecer, no disponen por el momento de una respuesta adecuada ante esta realidad mental.

5. Conclusiones

La política en materia cultural del actual gobierno se caracteriza por el empeño en marcar un distanciamiento e incluso una ruptura respecto a la política popular y, del otro lado, por la recuperación de posiciones socialistas tradicionales y el desarrollo de éstas hacia lo que hemos llamado cosmopolitismo cultural, que todavía no estaba al alcance de la generación de Felipe González, pero sí de la de Rodríguez Zapatero y su equipo, que forman parte de la segunda generación de la democracia. Los efectos más polarizadores surgen cuando, como hemos visto en el ejemplo de los “papeles de Salamanca”, se aplican, por razones

pragmáticas e ideológicas los principios de una política de reconocimiento de la diversidad cultural de dimensión global a nivel de la relación entre el Estado central y las Comunidades Autónomas.

Esta “política de la diferencia” (Charles Taylor) que exige no sólo la convivencia sino también el reconocimiento político del otro, se enfrenta, en España, con la todavía no resuelta situación del plurinacionalismo. Amplios sectores de la población no están dispuestos a considerar el problema de España como un problema de plurinacionalismo radical. La promesa de la ministra de Cultura en su primera comparecencia ante la Comisión de Cultura de “una España diversa y plural, que [...] no nos debe asustar, es la que está recogida en la Constitución” (Calvo 2004b: 37) habría resultado tautológica, si la política socialista no hubiera interpretado los conceptos “diverso” y “plural”, prudentemente abiertos en el texto de la Constitución, en un sentido radical. Para encauzar este proceso de diversificación cultural, la política cultural, en cuanto campo de políticas simbólicas, necesita, al parecer, desarrollar también formulaciones políticas reconciliadoras y cultivar símbolos visibles como el *Quijote*, en los cuales se refleja una imagen positiva del multiculturalismo, basado no en la diferencia, sino en la unidad de una cultura compartida por todos, y susceptible, por esta razón, de alimentar sentimientos de identidad nacional.

Bibliografía

- ACEBES, Ángel (2006): “Carmen Calvo dice que se ha cumplido la ley”, en: *El País Digital*, 20/01.
- ÁLVAREZ JUNCO, José (2004): “Expertos y papeles”, en: *El País Digital*, 31/12.
- ÁLVAREZ JUNCO, José/BERNAL I CERCÓS, Angels *et al.* (2006): “Informe de la comisión de expertos creada por el Patronato del Archivo General de la Guerra Civil para asesorar sobre el contencioso derivado de la reclamación de restitución de la documentación incautada a la Generalitat de Cataluña a la finalización de la Guerra Civil española. 23 de diciembre de 2004”, en: <<http://www.anabad.org/archivo/docdow.php?id=216>> (10/08).
- AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA (2006): <<http://web.aytosalamanca.es/archivo/presentacion.jsp>> (10/08).
- AZNAR, José María (2000): “Intervención”, en: Congreso de los Diputados: *Diario de Sesiones*, 25 de abril, <<http://www.congreso.es>>.

- CALVO, Carmen (2004a): “La cultura en los nuevos escenarios”. Conferencia de la ministra de Cultura en el Club Siglo XXI, el 13 de diciembre de 2004, en: *Nota de prensa del Ministerio de Cultura del 13 de diciembre de 2004* <<http://www.mcu.es>> (10/08/2006).
- (2004b): “Intervención”, en: Congreso de los Diputados: *Diario de Sesiones*, Comisión de Cultura, nº 29, del 24 de mayo de 2004 <<http://www.congreso.es>>.
- (2005a): “Intervención”, en: Congreso de los Diputados: *Diario de Sesiones*, Pleno, nº 100, del 23 de junio de 2005 <<http://www.congreso.es>>.
- CONFEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE ARCHIVEROS, BIBLIOTECARIOS, MUSEÓLOGOS Y DOCUMENTALISTAS (ANABAD) (2006): “Bases para un debate profesional en torno al Archivo General de la Guerra Civil (mayo-junio de 2004)”, en: <<http://www.anabad.org/archivo/?cat=6>> (10/08).
- CULLA, Joan (2006): “Justicia, no victoria”, en: *El País Digital*, 20/01.
- El País* (2006): “500 cajas para la memoria”, en: *El País Digital*, Cultura 20/01.
- ETTINGHAUSEN, Henry (2005): “Un robo es un robo”, en: *El País Digital*, 13/10.
- JUNTA DE CASTILLA-LEÓN (2006): “Declaración institucional de la Junta sobre el Archivo de Salamanca”. 2005, en: <<http://web.aytosalamanca.es/archivo/cartas/DeclaracionInstitucionalDeLaJunta.pdf>> (10/08).
- MINISTERIO DE CULTURA (2004a): “Nota de prensa del 11 de junio de 2004”, en: <<http://www.mcu.es>>.
- (2004b): “Nota de prensa del 28 de octubre de 2004”, en: <<http://www.mcu.es>>.
- (2005a): “Nota de prensa del 26 de enero de 2005”, en: <<http://www.mcu.es>>.
- (2005b): “Nota de prensa del 15 de abril de 2005”, en: <<http://www.mcu.es>>.
- (2005c): “Nota de prensa del 18 de febrero de 2005”, en: <<http://www.mcu.es>>.
- (2006): “Nota de prensa del 28 de abril de 2006”, en: <<http://www.mcu.es>>.
- PSOE (2006): “Programa electoral. Elecciones generales 2004”, en: <<http://www.psoe.es>> (10/08).
- ROBLES OROZCO, Gonzalo (2005): “Intervención”, en: Congreso de los Diputados: *Diario de Sesiones*, Pleno, nº 83, del 20 de abril, <<http://www.congreso.es>>.
- RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA, Beatriz (2004): “Intervención”, en: Congreso de los Diputados: *Diario de Sesiones*, Pleno, nº 41, 20 de octubre, <<http://www.congreso.es>>.
- RODRÍGUEZ ZAPATERO, José Luis (2004): “Intervención”, en: Congreso de los Diputados: *Diario de Sesiones*, sesión plenaria, nº 2, del 15 de abril, <<http://www.congreso.es>>.
- RUBIO ARÓSTEGUI, Juan Arturo (2003): *La política cultural en los gobiernos socialistas (1982-1996)*. Gijón.

- (2005): “La política cultural en los gobiernos populares (1996-2004): entre el ¿liberalismo? y el continuismo socialista”, en: *Sistema*, CLXXXVII, pp. 111-124.
- SANTOS UNAMUNO, Enrique (2005): “Unamuno y las guerras simbólicas”, en: *El País Digital* 22/11.
- TUSELL, Javier (2000): “Cuatro años de política cultural”, en: Tusell, Javier (ed.): *El gobierno de Aznar. Balance de una gestión*. Barcelona, pp. 135-152.
- YOLDI, José/LÁZARO, J. M. (2006): “La Audiencia Nacional paraliza el envío de los ‘papeles’ de Salamanca”, en: *El País Digital* del 21/01.